



Proceso	Acción popular
Demandante	Bernardo Abel Hoyos Martínez
Demandado	Almacenes Éxito S.A.
Radicado	05001-31-03-015-2019-00309-01
Procedencia	Juzgado 15 Civil del Circuito de Medellín
Instancia	Segunda
Ponente	Luis Enrique Gil Marín
Asunto	Sentencia N° 028
Decisión	Confirma
Tema	El derecho a un medio ambiente sano
Subtemas	Publicidad exterior visual

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA SEGUNDA DE DECISION CIVIL

Medellín (Ant.), ocho de octubre de dos mil veintiuno

I. OBJETO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el actor popular en contra de la sentencia proferida por el **JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, en la **ACCIÓN POPULAR** instaurada por el señor **BERNARDO ABEL HOYOS MARTÍNEZ** en contra de **ALMACENES ÉXITO S.A.**

II. ANTECEDENTES

Pretensiones: Solicita: "... *Determinar en sentencia de mérito (art 34 L-472) que hoy: la accionada propietaria de estos letreros y/o avisos, incurre en la violación de la Ley 140/94 y Decreto 1683/03 con estos elementos publicitarios. Y las demás condenas que determina el CGP/2012*".

Elementos fácticos: Afirma que "*La colocación en exceso de avisos publicitarios en un lugar prohibido (decreto 1683). Ubicado en Cl 11ª 42 49, El Poblado, Medellín. Según fotos captadas el 13 de junio 2019*".

Integración del contradictorio: Subsanados los requisitos echados de menos, se admitió en contra de ALMACENES EXITO; ordenó notificar a éste, a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, al MINISTERIO PÚBLICO, la SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN, la PERSONERÍA DE MEDELLÍN y se comunicara sobre la existencia de la acción popular a los miembros de la comunidad con la publicación de un aviso en un diario de amplia circulación.

Las notificaciones se surtieron por correo electrónico dirigido a las direcciones de la demandada y vinculadas; a los miembros de la comunidad, mediante publicación realizada en el periódico El Mundo, el 8 de diciembre de 2019.

La PROCURADURÍA VEINTISÉIS AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, se pronunció solicitando la práctica de la siguiente prueba: "*Solicitar a la Subsecretaria de Espacio Público y*

Control Territorial de la Secretaria de Seguridad y Convivencia de Medellín (...) realice una visita y emita informe técnico respecto de las vallas, letreros y/o avisos publicitarios ubicados en la CALLE 11 A No. 42-49, Barrio El Poblado de la ciudad de Medellín, objeto de la presente acción, alusiva a publicidad visual exterior o avisos publicitarios de la empresa ALMACENES ÉXITO S.A., cumple con las normas de avisos publicitarios y/o Publicidad exterior visual (longitud, altura, distancia con la vía, cantidad de avisos entre otras) conforme a la Ley 140 de 1994, Decreto 288 de 2018 derogatorio del decreto 1683 de 2003, acuerdo 036 de 2017 del Concejo Municipal de Medellín y demás normas concordantes”; al efecto, indica que la prueba es pertinente, conducente y necesario para demostrar si la publicidad visual exterior cumple o se adecua a las normas técnicas que regulan la materia.

ALMACENES ÉXITO S.A., se opuso a la prosperidad de las pretensiones porque el establecimiento de comercio denominado "CARULLA POBLADO", ubicado en la Calle 11 A # 42-49 de la ciudad de Medellín, cumple con todas las normas que en materia de publicidad exterior visual y avisos publicitarios reglamenta el Decreto Municipal 1638 de 2003, la Ley 140 de 1994 y demás normas aplicables a la materia; es una apreciación meramente subjetiva y sin sustento probatorio del actor, al señalar que en el establecimiento en mención se "colocan" en exceso avisos publicitarios y más aún, que aquellos están en un lugar prohibido. El demandante no cumple con la carga de señalar claramente: a) cuáles normas son violadas en el establecimiento de comercio, b) cuál publicidad exhibida la incumple y c) en qué forma. Simplemente aporta un registro fotográfico en su subsanación a la demanda, donde

no se aprecia la forma en que supuestamente no cumple con los parámetros normativos invocados; propuso las excepciones de mérito denominadas: ***"Inexistencia de derechos o intereses colectivos vulnerados", "Falta de presentación de la prueba de la norma jurídica indicada como violada", "Legalidad en la instalación de avisos publicitarios", "Falta de presupuestos materiales para declarar una responsabilidad, Ausencia de daño", Temeridad, mala fe y abuso del derecho"***.

SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO DE MEDELLÍN presentó concepto técnico negativo sobre la publicidad objeto de la acción popular, indica que encontró adosado a la fachada frontal un aviso de identificación, al igual que en la fachada lateral izquierda, los cuales cuentan con un área de 10.32m² por cada una de sus fachadas, cumpliendo lo establecido en el art. 10, numeral 10.15.1.3 del Decreto Municipal 0288 de 2018; adicionalmente, encontró instalados en las fachadas del establecimiento diez (10) elementos publicitarios comerciales. Superando el máximo de avisos publicitarios permitidos para este tipo de establecimientos, incumpliendo lo establecido en el art. 10.15.1, razón por la cual emite concepto negativo por cuanto los avisos publicitarios incumplen lo establecido en el Decreto Municipal 0288 de 2018, por el cual se reglamentan los avisos publicitarios en el municipio de Medellín.

En la audiencia de pacto de cumplimiento celebrada el 26 de febrero de 2020, ALMACENES ÉXITO propuso: *"contados cinco días a partir del 27 de febrero, procederemos (sic) las imágenes publicitarias existentes en las ventanas objeto de la acción popular, ya fueron retirados algunos, pero, los que hagan faltan*

(sic) *se retirarán en los cinco días siguientes*"; por su parte el ACTOR POPULAR manifestó: *"soy testigo de la adecuación de los letreros y anuncios colocados en el almacén Carulla objeto de esta acción. Por lo tanto considero que estamos ante un evento superado motivado justamente por el nacimiento de esta acción constitucional, por lo tanto declaro que estoy de acuerdo con las apreciaciones del togado del almacén y solicito que se actue (sic) de oficio bien sea para la sentencia anticipada del art. 278-2, puesto que realmente no existe formula de arreglo puesto que ya el arreglo fue ejecutado"*; la DEFENSORÍA, resaltó la disposición de la accionada de acogerse a la norma y propender por la protección de los derechos e intereses colectivos y en tal sentido *"emite concepto positivo para la aprobación de lo solicitado por las partes"*; la PROCURADURÍA, solicitó decretar la carencia actual de objeto por hecho superado y se profiera sentencia en tal sentido.

Decisión de primer grado: El 5 de marzo de 2020, se profirió sentencia anticipada, negando el amparo por carencia actual de objeto; además, condenó en costas a la parte accionada.

Como sustento indica que durante el trámite de la acción la demandada corrigió la vulneración denunciada, lo que dio lugar a la figura del hecho superado, situación que impide impartir orden frente a la accionada, *"pero genera la condena en costas en su contra, puesto que de no haber llevado a cabo el retiro de los avisos publicitarios, hubiesen salido avante las pretensiones del denunciante"*.

Recurso de apelación y sustentación: Lo interpuso la parte pasiva, indica que no era procedente dictar sentencia

anticipada en los términos del art. 278 del C.G.P.; en su lugar, se debió dictar sentencia aprobando el pacto de cumplimiento al que llegaron las partes en la audiencia del 26 de febrero de 2020 y, tampoco era procedente la condena en costas a cargo de la accionada porque como se debió aprobar el pacto según el art. 27 de la Ley 472, no procedía la condena en costas.

En el trámite de segunda instancia, durante el traslado para sustentar el recurso de apelación, la demandada se pronunció reiterando los argumentos expuesto al formular el recurso de apelación; por su parte, el actor popular no se pronunció.

III. CONSIDERACIONES

La protección de los derechos colectivos en tratándose de publicidad exterior visual: El art. 12 de la Ley 140 de 1994, sobre los mecanismos que se pueden utilizar para proteger los derechos colectivos en la publicidad exterior visual, cuando infringe la normativa existente, prescribe: "*Sin perjuicio de la acción popular consagrada en el artículo 1005 del Código Civil y el artículo 8o. de la Ley 9a. de 1989 y de otras acciones populares, cuando se hubiese colocado Publicidad Exterior Visual, en sitio prohibido por la ley o en condiciones no autorizadas por ésta, cualquier persona podrá solicitar su remoción o modificación a la alcaldía municipal o distrital respectiva. La solicitud podrá presentarse verbalmente o por escrito, de conformidad con el artículo 5° del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo).*

"De igual manera y sin perjuicio del ejercicio de la acción popular, los alcaldes podrán iniciar una acción administrativa

de oficio, para determinar si la Publicidad Exterior Visual se ajusta a la Ley” (Subrayas no originales).

Sobre la interpretación de los derechos colectivos y la observancia de las normas nacionales e internacionales el art. 7º de la Ley 472 de 1998, establece: *“Los derechos e intereses protegidos por las acciones populares y de grupo, de conformidad con el artículo 4º de la presente ley se observarán y aplicarán de acuerdo a como están definidos y regulados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que vinculen a Colombia (Subrayas no originales).”*

Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes oportunidades, entre ellas, en las sentencias C-535 de 1996 y C-046 de 1998; en esta última indica: *“Se dijo en esa ocasión, que la regulación relativa a la publicidad exterior visual era tema referente a la obligación estatal de preservar el medio ambiente, y, más específicamente, de conservar el paisaje como recurso natural renovable. Que debido al carácter global e integrado del medio ambiente y a la interdependencia de los distintos ecosistemas, en principio su regulación competía prima facie al poder central. En este orden de ideas, se señaló que la Carta Política contiene varias normas que plantean una forma unitaria y nacional de regulación del medio ambiente, entre ellas los artículos 2º, 79 inciso 2º, 80, 333, 334, 366, 268 y 277 ordinal 4º”¹.*

De la normatividad que viene de citarse y de los pronunciamientos de la Corte Constitucional se desprende que la protección de los derechos colectivos se puede obtener a través

¹ M. P. Dr. Vladimiro Naranjo.

de la acción popular, sin necesidad de acudir a otras instancias, trámites o procedimientos, o al cumplimiento de requisitos de procedibilidad.

También se colige que no se puede acudir a criterios de tipo subjetivo o a otro tipo de interpretaciones que desconozcan la normatividad nacional y local vigente en materia de exhibición de publicidad exterior visual, ya que es precisamente con dicha normatividad con la que se pretende proteger los derechos colectivos de la comunidad.

Caso concreto: La inconformidad de la parte pasiva con la sentencia de primer grado, radica esencialmente porque en su criterio, no era procedente dictar sentencia anticipada en los términos del art. 278 del C.G.P., sino haber dictado sentencia aprobando el pacto de cumplimiento al que llegaron las partes en la audiencia, lo que conllevaba a no condenar en costas, como lo dispone el art. 27 de la ley 472 de 1998.

Advierte la Sala que no le asiste razón a la demandada en el recurso de apelación, porque precisamente fue quien en la audiencia de pacto de cumplimiento afirmó que ya había retirado algunos de los avisos y que dentro de los cinco (5) días siguientes retiraría el resto de la publicidad para que se adecuara a la normativa vigente, con lo cual estuvo de acuerdo el actor popular, solicitando se dictara sentencia anticipada. Como fácilmente se puede advertir, fue la demandada quien por su propia iniciativa, sin que mediara un acuerdo con el actor popular y los demás intervinientes en el proceso, desmontó la publicidad para que se adecuara al ordenamiento jurídico, cometido que empezó a ejecutar desde antes de que tuviera

lugar la audiencia de pacto de cumplimiento; lo que evidentemente constituye un hecho superado que satisface las pretensiones de la demanda y con lo cual estuvo de acuerdo el demandante como viene de indicarse, lo que dio pie a la defensoría para solicitar que se aprobará lo solicitado por las partes y a la procuraduría a solicitar la carencia de objeto y a que se profiriera sentencia en ese sentido.

No queda duda que la demanda, las pruebas documentales que obran en el expediente, aportadas por la Subsecretaría de Espacio Público de la Alcaldía de Medellín y el concepto negativo emitido por el ente administrativo municipal, respecto a los avisos adosados a la fachada del establecimiento de la demandada, motivó a la demandada para que por su propia iniciativa adecuara la publicidad exterior, sin que ello hubiera sido el producto de un acuerdo concertado en la audiencia de pacto de cumplimiento; por tanto, no había lugar a impartir aprobación en tal sentido y, en su lugar, resulta adecuada la decisión adoptada en primera instancia, que determinó conforme a la prueba que obra en el expediente, que la vulneración si existió, fue superada e impuso condena en costas a favor del actor popular.

En cuanto a los presupuestos para una sentencia anticipada, se advierte que el demandante expresamente solicitó se diera aplicación a esta figura jurídica; la Defensoría emitió concepto favorable para que se aprobará lo solicitado por las partes y la Procuraduría solicitó dictar sentencia reconociendo la existencia de un hecho superado; ahora, aunque se pudiera cuestionar la actitud de la demandada, se advierte que cuando el actor popular pidió sentencia anticipada no formuló ninguna

oposición, lo que permite inferir que fue solicitada de común acuerdo por los extremos de la relación procesal y demás intervinientes; pero, además, el actor soportó la solicitud en el art. 278-2 del C. General del Proceso, esto es, porque no hay pruebas pendientes por practicar, solicitud que tampoco cuestionó la demandada; pero, además, de que ya existía suficientes elementos probatorios sobre los hechos debatidos en el proceso, no había pruebas pendientes por practicar; pues el informe técnico que pidió la Procuraduría al ente municipal, ya había sido emitido; en cuyo caso, hay lugar a dictar sentencia anticipada, incluso por iniciativa del juez sin necesidad de que medie solicitud de los litigantes.

Conclusión: Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en la sentencia de primer grado, se ajusta al material probatorio allegado y que aplicó la normatividad vigente sobre la materia, se impone su confirmación en su integridad.

Se condenará a la parte demandada a pagar las costas de segunda instancia a favor del actor popular.

IV. RESOLUCION

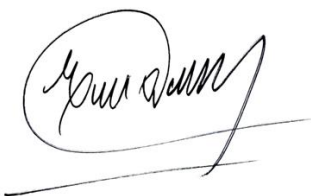
Consecuente con lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISION CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

- 1.** Se **confirma** la sentencia de fecha y procedencia descritas en la parte introductoria de esta providencia.
- 2.** Se condena a la parte demandada a pagar las costas de segunda instancia a favor del actor popular; las agencias en derecho se fijan en la suma de NOVECINTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTESIS PESOS (\$908.526), que equivale a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (Acuerdo PSAA16-10554, del 5 de agosto de 2016, expedido por el consejo Superior de la Judicatura), que se liquidaran conjuntamente con las de primer grado.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

LOS MAGISTRADOS



LUIS ENRIQUE GIL MARÍN



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA



RICARDO LEÓN CARVAL MARTÍNEZ

INFORMACIÓN DEL PONENTE PARA LA SALA: Se observa que la sentencia se profirió por escrito el 05 de marzo de 2020, fue apelada el día 11 del mismo mes y año por la parte pasiva, el recurso se concedió el 6 de marzo de 2021 y se remitió en forma digital a la Oficina Judicial del Tribunal Superior de Medellín, el 11 de del mismo año, quien la remitió a la Secretaría el 01 de junio y ésta a su vez la remitió al Despacho en esa misma fecha. Al efecto, el jugado previo a remitir el expediente a la Oficina Judicial del Tribunal Superior de Medellín dejó constancia secretarial el 5 de mayo del presente año, informando sobre las suspensión de términos y posteriores cierres del Edificio José Félix de Restrepo, lo cierto es que a partir del 01 de julio de 2020 se levantó la suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país y, si bien, mediante Acuerdo CSJANTA20-M01 del 29 de junio de 2020, se dispuso el cierre transitorio de los Despachos que funcionan en el Edificio José Félix de Restrepo y, posteriormente mediante Acuerdo CSJANTA20-80 del 12 de julio de 2020 se ordenó el cierre transitorio de los Despacho Judiciales ubicados en la comuna 10, entre el 13 y el 26 de julio de 2020, como la suspensión de términos, tal como se indica en la citada constancia, no se justifica que el recurso apenas se haya concedido el 6 de marzo de 2021; pues debió concederse inmediatamente se levantó la suspensión de términos judiciales, a lo que se agrega que la secretaria indicó expresamente en la citada constancia “Que en la acción popular con radicado 05001310301520190030900 le quedó pendiente el trámite del recurso de apelación de la sentencia emitida el 5 de marzo de 2020; que la suscrita fue nombrada como secretaria en provisionalidad desde el 2 de marzo de 2021”, lo que ratifica la injustificada mora en la concesión y remisión de

la apelación al Tribunal para que se surtiera el recurso de alzada.